



A Tumaco lo agobian las disidencias de las Farc y el crimen trasnacional

El presidente Iván Duque incluyó en sus primeros días de gobierno una visita al puerto nariñense sobre el Pacífico para realizar allí un consejo de seguridad y evaluar la difícil situación que viven sus pobladores urbanos y rurales en materia de orden público, donde se registra una fuerte influencia de agentes del cartel de Sinaloa, de México.

“Se le acabó la guachafita a ‘Guacho”, aseveró el jefe de Estado tras su llegada a Tumaco donde persiste una de las más críticas crisis humanitaria del país debido a la confrontación que libran desde el año pasado estructuras armadas surgidas luego del proceso de dejación de armas de las Farc, pero también donde hay presencia de agentes de carteles de México, enrareciendo el ambiente.

Se trató de la tercera visita oficial realizada por Duque Márquez luego de su posesión presidencial el pasado 7 de agosto (después de San Andrés y el Catatumbo). Y si bien enfatizó que “estaba cumpliendo una promesa hecha durante mi campaña”, la realidad que vive este puerto sobre el Pacífico nariñense amerita la atención urgente del nuevo gobierno. Uno de sus principales propósitos de esta visita fue analizar la compleja situación de orden público que padecen tanto Tumaco como los nueve municipios más que conforman la subregión de la Costa Pacífica Nariñense en compañía de funcionarios del Alto Gobierno como el ministro de Defensa, Guillermo Botero; el director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto; el comandante de las Fuerzas Militares, general José Alberto Mejía; y el comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, general José Hoyos, entre otros.

Al término del consejo de seguridad, el presidente Duque destacó resultados de operaciones militares como la incautación de artefactos explosivos y material de guerra efectuado por tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Hércules. También declaró haber dado instrucciones al alto mando militar “para que se refuercen las acciones disuasivas que nos permitan desarticular estas estructuras armadas”, a su vez que se comprometió a presentar “resultados muy precisos” en los próximos 180 días.

Aunque no entregó mayores detalles sobre cuáles serán esos resultados, en Tumaco todos esperan que las acciones ordenadas por el gobierno nacional ayuden a reducir la ola de asesinatos que hoy ubican a esta localidad como una de las más violentas del país. Las cifras al respecto son dicientes: según la Secretaría de Gobierno de Nariño, entre enero y julio de este año se registraron 148 homicidios mientras que en el mismo periodo del año pasado se contabilizaron 95.

Pero ese no es el único flagelo que azota con fuerza por estos días a Tumaco. Tanto la Personería como la Defensoría del Pueblo estiman que unas 300 personas de los barrios

Viento Libre, Nuevo Milenio, La Paz y Panamá han tenido que abandonar sus viviendas en los últimos dos meses debido, entre otros, a las amenazas proferidas por los grupos armados y el miedo generado por los enfrentamientos que tienen lugar casi a diario en estos asentamientos palafíticos y donde son utilizados explosivos artesanales, granadas de fragmentación y armas de largo alcance. (Leer más en: [Continúa preocupación por la violencia en Tumaco](#) y [La barbarie se ensaña contra Tumaco](#))

A este complejo escenario se suman otros delitos como la extorsión, la violencia sexual contra las mujeres, la vinculación y utilización de menores de edad por parte de los actores armados y la desaparición forzada, flagelos que se cuentan en voz baja entre los pobladores pero que nadie se atreve a poner en conocimiento de las autoridades. “Lo que nos cuentan las comunidades es que estás cosas vienen ocurriendo, particularmente la desaparición forzada. Pero el miedo y la desconfianza de la gente a denunciar es enorme”, sostiene Anni Castillo, personera de Tumaco. (Leer más en: [En búsqueda de ‘casas de pique’ en Tumaco, Fiscalía está cometiendo errores](#))

Paradójicamente, todo lo anterior ocurre en un contexto de fuerte militarización. El 12 de enero de este año, el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, puso en marcha la Campaña Policiva-Militar Plan Atlas, en la que participan la Fuerza de Tarea Hércules, que articula 9.800 soldados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; y el Comando Especial de Policía para el Pacífico Sur, que cuenta con 1.300 uniformados.

Según el general John Aroca, director del Comando Especial de Policía para el Pacífico Sur, “Tumaco es la población del país más densamente cubierta por miembros de la fuerza pública”; es decir, el mayor número de policías y militares presentes por cantidad de habitantes. Con todo y ello, la pregunta que los tumaqueños se formulan es: ¿y entonces, porque han subido tanto los homicidios a pesar de la presencia de tanto Policía y tanto militar?

“Si miramos las cifras fríamente, pues sí hay un incremento enorme. Pero hay que entender el contexto”, responde el general Aroca: “el año pasado estábamos en el proceso de paz, estábamos contando la gente, (los guerrilleros) que estaban ingresando a las zonas veredales, estábamos viendo quiénes eran y demás. Ahora, hay unos que están rehaciendo sus vidas, pero quedaron otros bandidos que quieren retomar el poder y quieren demostrar quién tiene el poder, quién es el que manda, a punta de bala”.

Autor:

[Factor México](#)